

III. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL

1) INTRODUCCIÓN

1. Las reformas comerciales emprendidas por Malí en el marco de los programas de ajuste estructural iniciados a partir de 1988 han permitido eliminar la mayor parte de los obstáculos no arancelarios al comercio. Con excepción del tabaco y los fósforos (cerillas), las materias preciosas (por ejemplo oro y diamantes) en bruto y los bovinos jóvenes (a la exportación), las restricciones vigentes se aplican a productos que se rigen por convenios internacionales de los que Malí es signatario, o se mantienen por razones de salud o de seguridad. Para la entrada o salida de mercancías de Malí es preciso presentar certificados (Intenciones de importación para las mercancías de un valor c.i.f. superior a 250.000 francos CFA e Intenciones de exportación). Las Intenciones de importación, y las de exportación de oro y algodón están sometidas al pago de derechos de timbre (derechos de registro). Las Intenciones, que siguen en vigor a pesar de las reformas comerciales realizadas, permiten también seguir la ejecución del programa de importación y exportación (IMEX), que es el marco para las previsiones del comercio (capítulo II.2)). Por añadidura, se requiere una autorización especial para las exportaciones de cueros y pieles. Desde 1989 existe un programa de verificación de las importaciones cuyo valor sea superior a 3 millones de francos CFA.

2. En 1991 Malí suprimió los derechos e impuestos sobre la mayor parte de los productos exportados, y solamente las ventas, incluidas las exportaciones de oro, siguen estando sujetas al pago de la contribución por prestación de servicio (CPS) del 3 por ciento, mientras que las de pescados abonan un derecho de 7,5 francos CFA por kg. También se han simplificado considerablemente los derechos de entrada. Las importaciones se agrupan en tres categorías principales: los productos de primera necesidad (categoría I), los bienes intermedios y de equipo (categoría II) y otros productos (categoría III). La media aritmética simple de los derechos de entrada (libres de los impuestos comunitarios del 1 por ciento en total sobre las importaciones procedentes de fuera de la UEMAO y la CEDEAO) es del 22,1 por ciento, con un mínimo del 3 por ciento y un máximo del 35 por ciento, que sube al 75 por ciento debido al impuesto coyuntural del 55 por ciento que grava ese producto. Los derechos de entrada tienen una dispersión mediana y presentan una progresividad, por lo general negativa, de los productos brutos a los productos semiacabados (cuadro III.1). La entrada en vigor del arancel exterior común de la UEMAO debería provocar un aumento del nivel efectivo de protección en Malí, debido en particular al reforzamiento de la progresividad (positiva) de los derechos.

Cuadro III.1
Derechos de entrada según el grado de elaboración, 1997
(Nivel y media en porcentaje)

Productos	Número de líneas arancelarias	Media	Nivel mínimo	Nivel máximo	Diferencia tipo	Coefficiente de variación
Productos brutos	693	27,4	3	35	11,9	0,43
Productos semielaborados	1.772	18,1	3	75	12,3	0,68
Productos acabados	3.077	23,3	3	35	13,1	0,56
Total	5.542	22,1	3	75	13,1	0,59

Fuente: Secretaría de la OMC sobre la base de informaciones proporcionadas por las autoridades de Malí.

3. Malí no cuenta con una legislación nacional en materia de medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia. De resultados de la devaluación del franco CFA se ha observado un aumento de las falsificaciones. Se falsifican medicamentos, casetes audio (actualmente está disminuyendo la importancia de la falsificación de casetes audio), artículos de deporte y grandes marcas. Las sanciones, impuestas con poca frecuencia, han sido simbólicas. El Tratado de la

Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI), del que es miembro Malí, se está modificando a fin de ponerlo en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

2) MEDIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS IMPORTACIONES

i) Registro y documentación

4. El ejercicio de la profesión de comerciante por los nacionales, así como por los ciudadanos de los países que han concluido con Malí un acuerdo sobre establecimiento, está sujeto a la inscripción en el registro de comercio y al pago de una patente que era de 550.000 francos CFA a finales de 1997. La inscripción da lugar a la expedición de un extracto del registro de comercio que es válido mientras no se presente una demanda de anulación de la inscripción. Antes de realizar el trámite de inscripción los extranjeros¹ necesitan la aprobación del Ministro encargado del comercio. Los nacionales y los extranjeros que desean ejercer la profesión de auxiliar de comercio (comisionista, corredor, representante de comercio) también necesitan esa aprobación, el Ministerio de Comercio expide al auxiliar una tarjeta profesional. El comerciante también debe inscribirse en la Dirección Nacional de Estadística e Informática (DNSI), donde se le expide un documento de identificación.²

5. Los trámites de importación pueden ser efectuados ya por el importador ya por un comisionista de aduanas. Los trámites no aduaneros, que se realizan en la ventanilla única del Ministerio de Comercio, requieren la factura pro forma y el certificado de pago de impuestos, documentos que han de adjuntarse a la demanda del título de importación, llamado Certificado de intención de importar; la demanda, y por consiguiente los trámites que exige, no son necesarios en el caso de las importaciones con fines no comerciales y cuyo valor c.i.f. sea inferior o igual a 250.000 francos CFA (sección vi)). En el momento de la importación efectiva se exigen las facturas definitivas, o los conocimientos o la carta de transporte aéreo, el seguro, la declaración de consumo y, si procede, el Certificado de intención de importar y el certificado de verificación de la sociedad de inspección.

6. La recepción por la sociedad de inspección de los documentos resultantes de los trámites no aduaneros equivale a una orden de inspección de las mercancías que se han de importar; las copias de esos documentos son utilizadas por el importador para domiciliar su operación en un banco y para efectuar el despacho de aduana.

ii) Inspección, valoración en aduana y despacho de aduana

7. Desde 1989 existe un programa de verificación de las importaciones. El contrato de inspección previa a la expedición, concertado con tal fin con la Société Générale de Surveillance (SGS), fue renovado en 1994. Conforme a las disposiciones del programa, toda las mercancías cuyo valor sea superior a 3 millones de francos CFA (o sea alrededor del 98 por ciento del valor total de las Intenciones de importación) están obligatoriamente sometidas a la verificación cualitativa y cuantitativa, la comparación de precios y la verificación de la partida arancelaria por la SGS. Las importaciones de valor c.i.f. superior a los 250.000 francos CFA, que requieren un Certificado de Intención de importar, son objeto de una inspección selectiva. La inspección de los hidrocarburos se

¹ Por extranjeros se entiende en este caso los ciudadanos de los países que no han concluido con Malí un acuerdo sobre establecimiento.

² El documento que expide la DNSI se utiliza para los análisis económicos pero hay un documento más reciente, que actualmente expide la Dirección Nacional de Tributos, que llegará a ser el documento único.

efectúa en el momento de la carga de los vehículos cisterna o vagones cisterna. Se comprueba la naturaleza y, la cantidad del producto y la identificación del importador. A la certificación de depósito de aduanas se le añade una marca de seguridad con destino a las autoridades de Malí. Esa manera de seguridad es exigible en todo momento para que la declaración en aduana sea aceptable. Según las autoridades, ese procedimiento permite seguir eficazmente las operaciones de tránsito de esos productos.

8. Están exentos de la inspección: el oro, las piedras preciosas, los objetos de arte, las municiones, armas y explosivos, los animales vivos, los productos frescos, la madera, los metales de recuperación, las plantas y flores, los abonos, las películas cinematográficas, los diarios y periódicos, los efectos y regalos personales, los paquetes postales, las muestras comerciales, el petróleo bruto, los donativos, los sueros y vacunas, los vehículos de los capítulos SH 8702, 8703 y 8704 y las importaciones efectuadas por las administraciones públicas, las misiones diplomáticas o consulares y organismos de las Naciones Unidas por cuenta propia.

9. El plazo para la emisión y puesta a disposición del importador del certificado de verificación (ADV) exigido para el despacho aduanero de las mercancías varía según las zonas de emisión: África, tres días hábiles; Europa, cuatro días hábiles; otros países, seis días hábiles, a partir de la fecha de recepción del expediente completo necesario. El costo de la inspección previa a la expedición por la SGS (totalmente a cargo del Estado) representa el 0,95 por ciento del valor f.o.b., con un mínimo de 120.000 francos CFA por intervención. Ese mínimo corresponde, sobre la base de la tasa del 0,95 por ciento, al costo de la inspección de mercancías por valor de 12.631.579 francos CFA, o sea más de cuatro veces el valor mínimo de las importaciones para las que se requiere la inspección.

10. La definición de valor en aduana que se aplica en Malí es la de Bruselas³, que corresponde al precio "normal" de las mercancías, es decir, el precio que pueden alcanzar esas mercancías (entre un comprador y un vendedor independiente) en el lugar y en el momento en que se declaran y en condiciones de competencia. Malí ha aplazado, de conformidad con las disposiciones del artículo 20 (trato especial y diferenciado) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, el paso al valor de transacción. Según las autoridades, el valor de transacción se aplicará a partir del año 2000, es decir, al finalizar el plazo otorgado a los países en desarrollo en virtud de ese trato.

11. Los valores declarados son objeto de controles (primarios, diferidos y *a posteriori*) por parte de la administración de aduanas, sobre la base de los certificados de verificación de la SGS y de las facturas del fichero de valores. En caso de controversias puede recurrirse al Comité Superior del Arancel⁴; hasta la fecha no se ha presentado ningún recurso. Los valores certificados por la SGS son considerados como referencia por las aduanas de Malí, que en la práctica los utilizan en la mayor parte de los casos. No se aplica ningún valor baremo; sin embargo, existen precios de referencia para los productos del petróleo a fin de limitar las fluctuaciones de los precios en el surtidor.

³ Artículo 27 del Código Aduanero de 1965.

⁴ Ese Comité, previsto en el artículo 22 del Código Aduanero, está compuesto por un representante del Ministro del Plan, un representante del Ministro de Comercio y Transporte, un representante del Ministro de Hacienda, un representante del Ministro de Desarrollo, un representante del Servicio de Asuntos Económicos, un representante de la Cámara de Comercio, un representante del Director de Aduanas y dos expertos designados uno por el representante de la administración de aduanas y el otro por el demandante. El Presidente del Comité es designado por los miembros en función de sus conocimientos (artículo 23).

12. Los procedimientos de despacho en aduana tienen dos etapas: en la oficina fronteriza se establece una declaración resumida de las mercancías; éstas van luego a la oficina de destino (bajo escolta aduanera) donde se termina la declaración y se despachan las mercancías. Tras visita y verificación de las mercancías se establece un boletín de liquidación, se pagan los derechos y se retiran las mercancías. Desde 1985 los procedimientos aduaneros están informatizados sobre la base del Sistema Aduanero Automatizado (SYDONIA), para el 95 por ciento del tráfico actualmente. Las operaciones de despacho en aduana duran en principio dos o tres días laborables en la oficina de destino. A estos trámites hay que añadir los controles frecuentes (60 puntos de control entre Bamako y Abidján)⁵ en el interior del país y en las fronteras, y las diferencias en la aplicación de los textos oficiales, que no están disponibles en todos los puntos de control.

13. La mayor parte de las infracciones aduaneras corresponden a la subfacturación y al contrabando de mercancías. Esta última forma de fraude afecta principalmente a bienes de gran consumo, como el azúcar, la leche, la harina, el té y los cigarrillos. Por otra parte, las deficiencias en la aplicación de los regímenes suspensivos permiten, por ejemplo, que ciertas mercancías entradas en almacenes aduaneros se afecten al consumo sin que se hayan pagado los derechos e impuestos correspondientes.

iii) Derechos de entrada

14. En materia de derechos de entrada, Malí concede a todos los países por lo menos el trato de nación más favorecida (NMF). Los derechos de entrada NMF comprenden un derecho de aduana, un derecho fiscal de importación, una contribución por prestación de servicio, el impuesto comunitario de solidaridad y el impuesto comunitario. Los impuestos internos sobre las importaciones (IVA e impuestos sobre el consumo) se cobran también en el cordón aduanero. La base sobre la que se calculan los derechos de entrada es el valor c.i.f., mientras que los impuestos internos se calculan sobre el valor c.i.f. al que han añadido los derechos de entrada. La reforma arancelaria, que se introdujo en el marco del Programa de Ajuste Estructural y entró en vigor en febrero de 1991, tenía por objeto racionalizar el sistema de protección de la producción local, simplificar la imposición de las mercancías importadas y reducir la presión fiscal que incita al contrabando y a la falsificación de las declaraciones de valor. En consecuencia, se ha simplificado el arancel de aduanas y se ha reducido la protección nominal, en particular para los equipos industriales, los principales insumos agrícolas y el material escolar. En Malí el nivel medio de la protección arancelaria podría aumentar con la aplicación del Arancel Exterior Común de la UEMAO.⁶

a) Naturaleza y nivel de los derechos NMF

15. Malí adoptó la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA), en 1994. El arancel aduanero vigente a finales de 1997 sólo comprende derechos *ad valorem*, el número total de partidas arancelarias de 8 dígitos del SA (versión 1996) es de 5.542. Malí no aplica derechos estacionales, contingentes arancelarios ni gravámenes variables. La estructura de los derechos de entrada se ha simplificado en el marco de la reforma arancelaria: se ha reducido el número de impuestos y de tipos de derechos de aduana.⁷ A efectos tributarios, las importaciones se agrupan en tres categorías principales: productos de primera necesidad (categoría I), bienes intermedios y de equipo

⁵ CEFTE (1997a).

⁶ CEFTE (1997a).

⁷ Se aplicaban 13 impuestos y 27 tipos de derechos de aduana.

(categoría II) y otros productos (categoría III).⁸ Desde agosto de 1997 las materias primas, los bienes intermedios y las piezas de recambio destinadas a la industria se gravan lo mismo que los productos de la categoría I. Los derechos de entrada actualmente en vigor comprenden: el derecho de aduana del 0 por ciento (categoría I) y del 5 por ciento (categorías II y III); el derecho fiscal de importación del 0 por ciento (categoría I), 10 por ciento (categoría II) y 25 por ciento (categoría III); la contribución por prestación de servicio del 3 por ciento sobre los productos petrolíferos y el 5 por ciento sobre los demás productos⁹; el impuesto comunitario y el impuesto comunitario de solidaridad, ambos del 0,5 por ciento que se perciben por cuenta de la CEDEAO y de la UEMAO; y un impuesto coyuntural de importación, que se aplica al azúcar, del 55 por ciento (era del 25 por ciento hasta marzo de 1997)¹⁰; en el caso del arroz ese impuesto se suspendió tras la devaluación del franco CFA. El impuesto coyuntural de importación se introdujo para reforzar la protección de la producción nacional objeto de "fuerte competencia". Su nivel se calcula en función del precio de costo nacional y del precio mundial.

16. La media aritmética simple de los derechos de entrada (excluidos el impuesto comunitario y el impuesto comunitario de solidaridad, del 1 por ciento en total) es del 22,1 por ciento, con un mínimo del 3 por ciento y un máximo del 35 por ciento (75 por ciento sobre el azúcar debido al impuesto coyuntural de importación del 55 por ciento). Los derechos de entrada muestran una dispersión mediana: el coeficiente de variación es de 0,59 e indica que en general hay diferencias medianas entre los derechos según los tipos de productos. Los productos menos gravados son los de las industrias químicas y farmacéuticas, la maquinaria no eléctrica y el petróleo. Los productos más gravados son los productos de la pesca, el tabaco, las prendas de vestir, los productos del cuero, calzado, muebles (excepto los metálicos), productos de alfarería y porcelana (gráfico III.1).

17. En 1996 no se utilizaba en Malí el 49 por ciento de las líneas arancelarias. La media aritmética simple de los derechos de entrada calculada sobre las partidas arancelarias utilizadas es ligeramente más baja: 21,7 por ciento. El coeficiente de recaudación de los derechos de entrada (es decir la totalidad de los ingresos por concepto de derechos de entrada en relación con el valor c.i.f. de las importaciones destinadas al consumo) es del 9,4 por ciento.

18. Los derechos de entrada manifiestan una progresividad, por lo general negativa, de los productos brutos a los bienes semielaborados (gráfico III.2). Excepto para los productos de la madera, el papel, los productos químicos, el petróleo, los productos del petróleo y del carbón, los productos de caucho y los productos de hierro y acero para los cuales los derechos de entrada son progresivos, a los demás tipos de mercancías se les aplican derechos con progresividad negativa (cuadro AIII.1).

⁸ La nueva clasificación en cuatro categorías de la UEMAO debería adoptarse a más tardar el 1º de julio de 1998 y aplicarse a partir del 1º de enero de 1999.

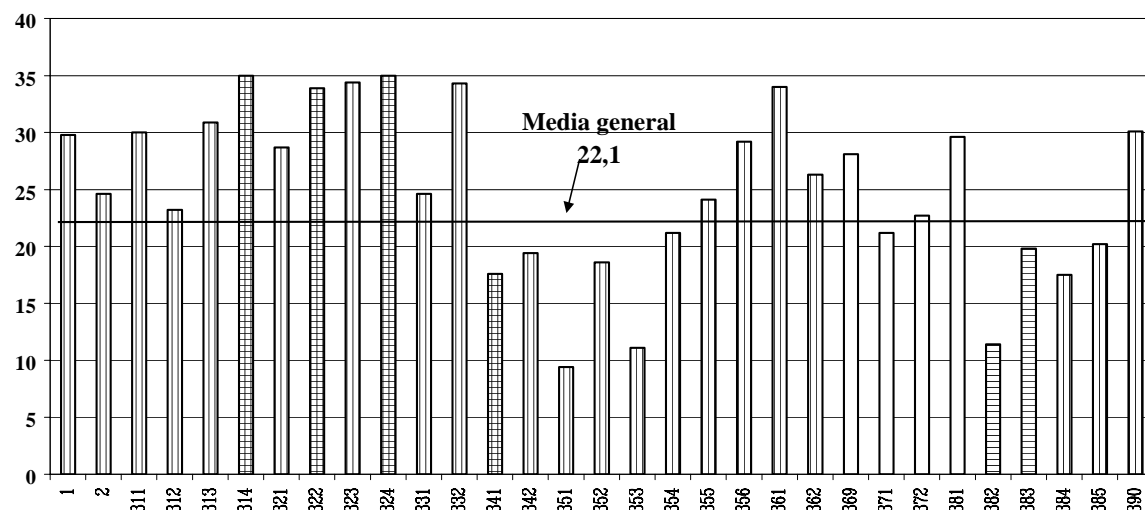
⁹ El 80 por ciento de las importaciones exentas han de pagar la contribución por prestación de servicio.

¹⁰ El impuesto coyuntural de importación sobre el azúcar se reduce durante el mes de cuaresma y vuelve a su nivel anterior después de ese período "sensible".

Gráfico III.1

Derechos de entrada medios (libres del impuesto comunitario) por tipo de productos, 1997

Porcentaje



CIU^a

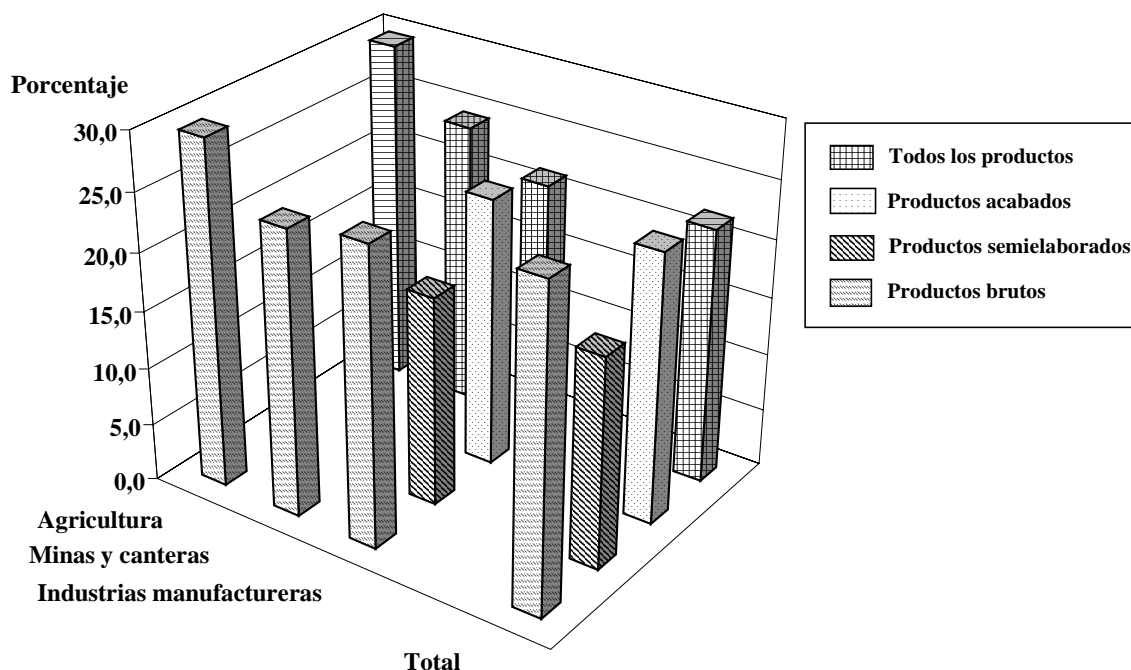
CIU ^a	Descripción
1	Agricultura
2	Minas y canteras
311	Productos alimenticios
312	Industrias agroalimentarias
313	Bebidas
314	Tabaco
321	Textiles
322	Prendas de vestir
323	Manufacturas de cuero
324	Calzado
331	Manufacturas de madera
332	Muebles excepto los metálicos
341	Manufacturas de papel
342	Edición, imprenta
351	Productos de la industria química
352	Otros productos químicos

CIU

CIU	Descripción
353	Petróleo
354	Productos derivados del petróleo y del carbón
355	Productos de caucho
356	Manufacturas de plástico
361	Artículos de barro y de porcelana
362	Vidrios y sus manufacturas
369	Productos minerales no metálicos
371	Productos de hierro y acero
372	Metales no ferrosos
381	Productos metálicos
382	Máquinas no eléctricas
383	Máquinas eléctricas
384	Transporte
385	Equipo profesional y científico
390	Otras manufacturas

^a Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC a partir de datos proporcionados por las autoridades de Malí.

Gráficos III.2**Derechos de entrada medios según el grado de elaboración (CIU Revisión 2) 1997****Fuente:** Estimaciones de la Secretaría de la OMC.

b) Otros derechos e impuestos

19. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) está en vigor desde 1991. El IVA tiene actualmente dos tipos: un tipo reducido del 10 por ciento y un tipo normal del 15 por ciento; esos tipos son los más bajos de la UEMAO. El IVA sobre las importaciones se calcula sobre el precio c.i.f., al que se añaden los derechos de entrada.¹¹ Están exentos del IVA: las ventas por los agricultores de sus productos agrícolas y ganaderos, las operaciones efectuadas por pescadores en lo que se refiere a los productos de su pesca no transformados, las ventas de obras de arte originales por el artista creador, las ventas de cereales en grano, las ventas de carne y despojos comestibles crudos, el pan, la caña de azúcar, la actividad de los productores y empresarios de obras públicas cuya cifra de negocios anual sea inferior o igual a 1 millón de francos CFA, los animales reproductores, las patatas y verduras de siembra, el arroz, el maíz, los cacahuets y las semillas de algodón para siembra, los abonos, los plaguicidas, el material agrícola, las bombas de agua, los medicamentos, los instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos, los libros de texto, los sellos y el papel sellado, ciertos productos petrolíferos, el pan y la caña de azúcar. Las exportaciones están sometidas a un derecho nulo a los efectos del reembolso del IVA percibido sobre los insumos y factores de producción que entran en su fabricación.

¹¹ Artículo 487 del Código General de los Impuestos.

20. El impuesto por prestación de servicios se aplica a todas las personas que efectúan una prestación de servicios y realizan un volumen de negocios superior a 1 millón de francos CFA.¹² El impuesto tiene también un tipo reducido del 7 por ciento que se aplica a las actividades de transporte, de espectáculos, de suministro y evacuación de aguas y de telefonía. Los demás servicios están sujetos al tipo normal del 15 por ciento. Al contrario de lo que sucede con el IVA, el impuesto por prestación de servicio no es imputable, lo que da origen a una carga fiscal en cascada que puede gravar la competitividad del conjunto de bienes objeto de comercio, y en particular de las exportaciones.

21. Sobre diversos bienes (cuadro III.2) se recauda un impuesto especial sobre ciertos productos, impuesto al consumo que en el caso de los productos importados se calcula sobre el valor c.i.f. al que se añade el derecho de importación. El monto de ese impuesto se incluye en la base para el cálculo del IVA. Por otra parte, desde 1993 se recauda en el cordón aduanero un anticipo sobre diversos impuestos y tasas en tanto que impuesto anticipado. Ese anticipo es el 5 por ciento del valor c.i.f., se aplica a todas las importaciones y se deduce de todos los impuestos. El anticipo ha sido establecido para conseguir que el contribuyente del sector no estructurado se identifique si no quiere perder las sumas pagadas como anticipo sobre diversos impuestos y tasas. En la práctica los operadores suelen preferir perder el anticipo, probablemente porque su monto es inferior al que deberían abonar si se declararan oficialmente a Hacienda; el deseo de eludir las diversas limitaciones administrativas que entraña todo procedimiento de declaración desempeña con toda seguridad un papel importante a este respecto.

c) Consolidaciones de derechos y tasas

22. Malí ha consolidado, en el marco de la Ronda Uruguay los tipos de derechos de aduana aplicables a los productos agrícolas (lo mismo que los demás países Miembros de la OMC) y los aplicables a los productos incluidos en los capítulos 44, 81 y 92 del Sistema Armonizado. Con tal fin Malí ha fijado un nivel máximo del 60 por ciento para todos esos productos. Los demás derechos e impuestos sobre las importaciones de esos productos se han consolidado en un 50 por ciento. No obstante, las consolidaciones arancelarias sobre los productos agrícolas no afectan a los bienes incluidos anteriormente en la lista (XCIV) de Malí, es decir, aquellos para los que se consolidaron los tipos de los derechos de aduana cuando Malí era una colonia. Por otra parte, los demás derechos e impuestos comunicados por Malí a este efecto comprenden el impuesto degresivo de protección, que ya no está en vigor, pero no la contribución por prestación de servicio. Con la aplicación del arancel exterior común, la Comisión de la UEMAO tiene intención de renegociar las concesiones arancelarias de todos los países miembros, incluidas las que figuraban en las antiguas listas.

¹² Están sujetos al impuesto por prestación de servicio las operaciones siguientes: el alquiler de bienes y servicios, los trabajos por contrata no relacionados con una actividad de producción, las actividades de intermediarios (comisionistas, corredores), las ventas de productos para el consumo inmediato, las actividades de espectáculo y esparcimiento, las actividades relacionadas con el ejercicio de una profesión liberal, las actividades de los bancos, establecimientos financieros y organismos de crédito, las actividades de transporte y las actividades de publicidad.

Cuadro III.2
Impuesto especial sobre ciertos productos, 1998
 (Porcentaje)

Productos	Impuesto especial
Nueces de cola	15
Aguas	10
Cerveza de malta presentada en recipientes de contenido inferior o igual a 50 cl	30
Otras cervezas de malta	20
Vinos espumosos	30
Vinos y mostos de uva con fermentación interrumpida por adición de alcohol	20
Vermut y vinos de plantas o sustancias aromáticas	5
Cervezas salvo las cervezas de malta	20
Otros alcoholes etílicos	90
Aguardientes de vino o de orujo	90
Whiskys	90
Ron y demás aguardientes de caña	90
Gin y ginebra	90
Vodka	90
Licores	90
Otros alcoholes	90
Cigarros, cigarrillos que contienen tabaco o un sucedáneo del tabaco	40
Tabacos homogeneizados o reconstituidos	20
Extractos y salsas de tabaco	20
Sal	10
Petróleos parcialmente refinados	10
Gasolina de aviación	25
Supercarburante	125
Gasolina ordinaria de automóvil	125
Queroseno	25
Petróleo lampante	3
Gasoil	90
Fueloil	2
Aceites lubricantes	10
Grasa	10
Gas natural	10
Cartuchos	20

Fuente: Autoridades de Malí.

d) Preferencias arancelarias

23. El esquema de liberalización del comercio de la CEDEAO (capítulo II) comprende en principio dos elementos: la eliminación a partir de 1994 de todos los obstáculos no arancelarios para todos los productos originarios de la CEDEAO y la reducción progresiva de los obstáculos arancelarios intracomunitarios. De conformidad con los acuerdos de la CEDEAO, desde el 1º de enero de 1990 los productos agrícolas y los productos de artesanía tradicional deberían circular en franquicia aduanera total cuando están incluidos en la lista de productos aprobada por la Comunidad y van acompañados de un certificado de origen expedido por el organismo competente designado por el país exportador. Los productos industriales acabados originarios de la Comunidad deberían beneficiarse de reducciones arancelarias sobre la base de diferentes criterios, incluido el nivel de desarrollo industrial de los países y su carácter insular o sin litoral. En el caso de Malí, el período de desarme arancelario se ha fijado en 10 años, lo que representa una disminución del 10 por ciento anual (capítulo II.5) ii) b)). En la práctica subsisten numerosos obstáculos arancelarios y no arancelarios; no se ha respetado el calendario de liberalización del comercio intracomunitario y hasta finales de 1997 no se había aprobado ningún producto.

24. De conformidad con los acuerdos de la UEMAO, los productos agropecuarios y de la artesanía tradicional originarios de la Unión están exentos de derechos de entrada en Malí. Asimismo, los productos industriales con derecho a acogerse a la imposición preferencial comunitaria (cuadro II.2) se benefician de una reducción del 60 por ciento sobre los derechos e impuestos a la importación¹³; 544 productos (incluidos los productos agroindustriales, el tabaco, los cigarrillos y los productos textiles) que pertenecían a 151 empresas de la UEMAO ya habían sido aprobados a finales de 1997.¹⁴ Los productos industriales no aprobados para acogerse a la imposición preferencial comunitaria deberían beneficiarse de una reducción de 5 puntos que no se aplica en Malí.

e) Exenciones arancelarias y fiscales

25. En 1996, gozaba de exenciones el 17,3 por ciento del valor total de las importaciones aceptadas al consumo y el 6,5 por ciento de las importaciones exentas correspondían a empresas aprobadas o amparadas por un acuerdo (cuadro III.3). Prácticamente todas las exenciones se conceden sobre la base del Código de Inversiones, el Código Minero, el Código particular de las inmobilizaciones, la Convención de Viena, o bien se conceden a las importaciones realizadas en el marco de proyectos con financiación extranjera. Por ejemplo, el 8 por ciento de las importaciones totales estaban exentas al amparo del Código Minero en 1995, en comparación con cerca del 42 por ciento en 1996. No obstante, las exenciones de derechos de entrada en virtud del Código de Inversiones se han suprimido, salvo aquéllas que se concedieron conforme al antiguo código. La parte de las exenciones excepcionales es marginal (1,3 por ciento del total). Desde agosto de 1997 se conceden exenciones parciales a empresas industriales cuyas importaciones de materias primas, productos intermedios y piezas de repuesto están gravadas con los tipos de la categoría I: sobre esas importaciones sólo se percibe la contribución por prestación de servicio. Las empresas francas disfrutaban de exenciones en virtud de un régimen que suspende los derechos de entrada sobre sus actividades de importación (capítulo II.4) ii)).

Cuadro III.3
Exenciones por grandes categorías, 1996
(Millones de francos CFA y porcentajes)

	Valor c.i.f.	Parte en %
Código de Inversiones	2.027	2,5
Código Minero	33.795	41,7
Admisiones excepcionales	1.020	1,3
Financiación exterior	23.271	28,7
Privilegios diplomáticos	2.333	2,9
ONG	762	0,9
Sociedades amparadas por un acuerdo	3.204	4,0
Diversos (ejército, policía, etc.)	14.571	18,0
Total	80.983	100,0
En % de las importaciones		17,3

Fuente: Autoridades de Malí.

¹³ Hasta junio de 1997 los productos industriales con derechos a acogerse a la imposición preferencial comunitaria disfrutaban de una reducción del 30 por ciento de los derechos e impuestos de importación. La aprobación de un producto la otorga una Comisión de la UEMAO.

¹⁴ Los productos aprobados sólo representaban el 4 por ciento del total del comercio de productos industriales dentro de la UEMAO a finales de 1996. Hasta julio de 1997 habían recibido la aprobación los productos de 11 empresas de Malí.

26. Aunque se prevé la supervisión de las condiciones que han de cumplir las empresas, esa supervisión no se lleva a cabo efectivamente. Cada servicio interesado tendría que intervenir: por ejemplo, la Dirección Nacional de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo. No obstante, en caso de no respetarse las condiciones, la Dirección Nacional de Industria podría revocar la aprobación.

iv) Normas de origen

27. En Malí no hay reglas nacionales relativas al origen de las mercancías. No obstante, hay normas de origen (a los efectos del trato preferencial) en acuerdos comerciales de los que es signatario Malí. Las normas de origen en el marco de la CEDEAO y de la UEMAO se basan en los porcentajes de insumos locales utilizados o en el porcentaje de valor añadido nacional en el producto final (capítulo II.5 ii) b) y c)). En el año 2000 deberían entrar en vigor en la UEMAO nuevas normas de origen basadas en las suposiciones del Acuerdo de la OMC. En el marco del Convenio de Lomé, la transformación completa (bienes producidos enteramente en el país) o suficiente (cambio de partida arancelaria) de un producto permite considerarlo originario del país ACP en el que se ha realizado esa transformación (capítulo II.5 iii)).

v) Medidas antidumping, medidas compensatorias y medidas de salvaguardia

28. Malí no cuenta con una legislación nacional en materia de medidas antidumping, medidas compensatorias ni medidas de salvaguardia. Por otra parte, Malí no ha aplicado ninguna de esas medidas.

vi) Prohibiciones, restricciones cuantitativas y licencias

29. Malí ha suprimido la mayor parte de las restricciones cuantitativas a la importación. Las únicas prohibiciones que siguen en vigor obedecen a razones de seguridad o de salud, o al cumplimiento de convenios internacionales de que es signatario Malí (por ejemplo, el Convenio de Montreal).

30. El Decreto 89-194/P-RM de 15 de junio de 1989, sobre la reglamentación del comercio exterior, establece dos regímenes distintos: el régimen del comercio liberalizado y el régimen de la prohibición. En el artículo 23 de ese Decreto se estipula que ciertas mercancías pueden ser objeto de vigilancia o de disposiciones particulares por razones de seguridad o de moral pública, defensa de los intereses de los consumidores, protección de la propiedad industrial o comercial, protección del origen (más concretamente origen maliense) o de otras consideraciones de orden político, económico o social. Las prohibiciones de importación responden especialmente a algunas de esas preocupaciones. El Ministro de Comercio publica la lista de productos prohibidos. Las prohibiciones de importación pueden ser absolutas con fines restrictivos. Están absolutamente prohibidas las importaciones de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, medicamentos para uso humano (salvo autorización del Ministerio de Sanidad) y veterinario (salvo autorización conjunta de los Ministerios de Sanidad y de Ganadería) y productos extranjeros naturales o fabricados que lleven un signo o indicación que permita creer que han sido fabricados en Malí o que son originarios de Malí.

31. Las prohibiciones con fines restrictivos se aplican a productos que sólo pueden importarse previa presentación de un certificado sanitario o fitosanitario (sección vii) b) *infra*) y de una autorización de los servicios de seguridad (armas y municiones), los servicios competentes del Ministerio de Aguas y Bosques (redes de pesca de mallas no estiradas de menos de 50 mm) o del Ministro de Comercio (cigarrillos, tabacos y cerillas importados sin autorización únicamente por la Sociedad Nacional de Tabacos y Cerillas a pesar de la supresión desde 1989 del monopolio legal de importación). Ese tipo de prohibición se aplica igualmente a las importaciones de vehículos

automóviles, salvo las de vehículos de turismo y vehículos ligeros, que pueden ser autorizadas por los servicios técnicos del Ministerio de Transportes.¹⁵ Las importaciones de hidrocarburos están regidas por un reglamento particular (sección ii) *supra*).

32. Todas las importaciones cuyo valor c.i.f. sea superior a los 250.000 francos CFA deberán ser objeto de una solicitud de Certificado de intención de importar. El formulario de la solicitud está en venta en la Cámara de Comercio al precio de 600 francos CFA. Hay dos categorías de Intenciones de importación: con liquidación financiera si la operación es objeto de un pago en divisas o en francos CFA; y sin liquidación financiera para las operaciones sin contrapartida financiera.¹⁶ Los formularios debidamente llenados deben entregarse en el servicio único instalado en la Dirección Nacional de Asuntos Económicos en el que participan un representante de esa Dirección, un representante de la Dirección Nacional del Tesoro y la Contabilidad Pública (o Servicio de Moneda Extranjera)¹⁷ y un representante de la Dirección General de Tributos (Servicio del Patrimonio). Ese servicio percibe los derechos de timbre y de registro que ascienden a 3.000 francos CFA por cada tramo de 500.000 francos CFA de valor c.i.f. (sobre la base de la factura proforma); los derechos de registro para el primer tramo ascienden a 6.000 francos CFA, o sea 600 francos por cada subtramo de 50.000 francos CFA. El representante de la Dirección Nacional de Asuntos Económicos está encargado de verificar la conformidad del Certificado de intención de importar con la factura proforma, el número de identificación y el certificado de pago de impuestos válido (no caducado). El plazo para el examen de las solicitudes es de 24 horas. Las Intenciones de importación son nominativas e intransferibles. Tienen una validez de seis meses (a partir de la fecha del registro en los servicios de la Dirección Nacional de Asuntos Económicos), prorrogable por un plazo de tres meses previa presentación de una prueba de la expedición de las mercancías.

vii) Normas, prescripciones ecológicas y otras prescripciones técnicas

a) Normas, ensayos y certificación

33. Desde 1992 Malí está tratando de establecer un sistema de normalización y control de la calidad. La Ley N° 92-013/AN-RM del 17 de septiembre de 1992 y el correspondiente Decreto de aplicación N° 92-235/P-RM del 1° de diciembre de 1992 rigen ese sistema. Sin embargo, Malí no dispone de normas nacionales; actualmente sólo están en vigor las normas internacionales (por ejemplo, el Codex Alimentarius de la OMS y la FAO). Aunque se han seleccionado laboratorios malienses (el laboratorio nacional de salud, el del Centro Nacional de Investigación y Experimentación en Edificaciones y Obras Públicas y los de Tube del Instituto de Economía Rural), por falta de financiación éstos no están todavía equipados y no se efectúan, por ende, ni ensayos ni certificaciones; pueden realizarlos por su cuenta las personas físicas o jurídicas interesadas.

34. Según las autoridades, el sistema de normalización y de control de calidad será operacional en 1998. Para concienciar a la población se organizan seminarios sobre normalización. La Dirección Nacional de Calidad y Normalización del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanado es el servicio competente en materia de reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad.

¹⁵ Documento de la OMC G/LIC/N/3/MLI/1 de 10 de junio de 1997.

¹⁶ Las Intenciones sin liquidación financiera se refieren a los donativos, las importaciones realizadas por filiales y las muestras, por ejemplo.

¹⁷ La atribución de divisas para las necesidades de importación está en efecto sometida a la presentación de un ejemplar de la Intención de importación.

35. El Consejo Nacional de Normalización y Control de Calidad está encargado de proponer medidas legislativas, reglamentarias, financieras o técnicas que puedan contribuir al desarrollo de la normalización en Malí y de aprobar los proyectos de normas nacionales elaborados por los comités técnicos. Los seis comités técnicos, establecidos en 1994¹⁸, están encargados de identificar las necesidades y proponer proyectos de normas, cada uno en su esfera de competencia; también están encargados de realizar las encuestas públicas previas a sus propuestas. La homologación de las normas se haría por un decreto conjunto del Ministerio de Industria y el del sector concreto de que se trate. En Malí las normas podrían tener carácter obligatorio (las adoptadas por orden interministerial) o facultativo.

b) Reglamentos sanitarios y fitosanitarios

36. La protección sanitaria y fitosanitaria corresponde al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Un texto legislativo¹⁹ determina las enfermedades "legalmente contagiosas"²⁰ y precisa las medidas especiales que han de adoptarse contra cada enfermedad (vacuna, matanza por razones sanitarias). Se autoriza la trashumancia de animales de las especies bovina, ovina, caprina y camelina originarios de Estados que hayan firmado un acuerdo con la República de Malí²¹, a reservas de la expedición de un certificado de trashumancia. Las importaciones de animales domésticos o silvestres están sometidas a la presentación de un certificado sanitario expedido por el país de origen. Los animales que no lleven ese certificado serán puestos en cuarentena.

37. Todas las importaciones de productos de origen animal están sometidas en principio a un control que efectúan los servicios veterinarios del Estado. Es obligatorio que las importaciones y exportaciones de carne vayan acompañadas de un certificado sanitario; las importaciones o el tránsito de ganado deben ir acompañados de un certificado sanitario y de vacunación. El Estado cobra un derecho por ese control. Por ejemplo, en lo que se refiere a las inspecciones en los mataderos, el Estado cobra un derecho por animal sacrificado que varía, en función de la especie y de la comuna del sacrificio, de 150 a 4.000 francos CFA por cabeza. En la práctica hay animales que cruzan la frontera fuera de los puestos de control y escapan así a toda vigilancia.

38. La legislación sobre el embalaje y los controles fitosanitarios data del comienzo del decenio de 1960.²² Esos textos ya no están adaptados a la realidad actual del sector agrícola, incluida la ganadería, la pesca y la silvicultura; está previsto un nuevo examen de esos textos en 1998. De

¹⁸ Los comités técnicos que existen en Malí son los siguientes: el comité "frutas, verduras y semillas oleaginosas", el comité "obras públicas y materiales de construcción", el comité "cereales y derivados", el comité "química y medio ambiente", el comité "textiles, cueros y pieles" y el comité "electrónico". Esos comités, que reúnen a los diferentes agentes interesados fueron establecidos respectivamente por los decretos N° 94-0644/MCIT-DNI, N° 94-0645/MCIST-DNI, N° 94-0643/MCIT-DNI, N° 94-0646/MCIT-DNI, N° 94-0647/MCIT-DNI y N° 94-1754/MCIT-DNI.

¹⁹ Ley 95-060 por la que se reprimen las infracciones a la política veterinaria en el territorio de la República de Malí y Decreto 95-372/P-RM de 18 de abril de 1995 por el que se reglamenta la vigilancia sanitaria de los animales en el territorio de la República de Malí.

²⁰ Artículo 2 del Decreto 95-372/P-RM.

²¹ Artículo 41 del Decreto 95-372/R-RM. Malí ha firmado acuerdos que autorizan la trashumancia con los siguientes países: Burkina Faso, Níger, Ghana, Mauritania, Senegal, Argelia y Libia. Hay proyectos de acuerdos con Guinea, Côte d'Ivoire y Nigeria.

²² Diversos decretos y órdenes de 1962.

conformidad con esa legislación, las importaciones y exportaciones de plantas requieren la presentación de un certificado fitosanitario. Debido a la falta de infraestructuras y de recursos humanos, esos controles no se efectúan en todas las regiones.

c) Medidas de protección del medio ambiente

39. Según el Código de Inversiones, uno de los elementos para la apreciación de los proyectos cuya aprobación se solicita son sus efectos sobre el medio ambiente. Además, el Gobierno está preparando un Plan Nacional de Acción Ambiental. En una ley sobre las condiciones de vida²³, votada en 1991, se prevén las modalidades de la eliminación de desechos, se prohíbe la contaminación de las aguas y se somete a autorización previa la emisión de sustancias contaminantes en el aire. Nunca se ha promulgado el decreto de aplicación; en Malí no hay normas ambientales y en las políticas sectoriales (turismo, industria, transportes, minas) no se definen tampoco esas normas.

40. Se están realizando gestiones para que Malí firme la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convención de Wáshington). Una ley²⁴ protege la fauna silvestre y su hábitat; prevé la promulgación de ordenanzas para fijar los períodos de apertura de la caza y se definen las especies protegidas. La explotación de los recursos forestales también está regida por una ley²⁵, que define las modalidades de roturación, las especies protegidas y los derechos de uso.

d) Prescripciones en materia de marcas y etiquetas

41. Diversos decretos del Ministro de Comercio establecen las prescripciones en materia de marcas y etiquetas. Las menciones obligatorias se refieren sobre todo a la inscripción "venta en Malí" o los medios de identificación del importador en el embalaje exterior. Según las autoridades, la mención "venta en Malí", obligatoria en el caso de ciertos productos nacionales similares, permite diferenciarlos de los que ingresan fraudulentamente en el país.

viii) Contratación pública

42. Malí no es signatario del Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de la Ronda Uruguay. El primer código de contratación pública de Malí data de 1983; el que está actualmente en vigor es de 1995.²⁶ El Código rige las compras efectuadas por el Estado y las colectividades locales, los establecimientos públicos, las sociedades estatales y las sociedades con participación mayoritaria del sector público. Las compras del sector público de valor superior a 10 millones de francos CFA (250 millones para las compras efectuadas por los establecimientos y sociedades públicas y por las sociedades con participación mayoritaria del sector público) están sujetas a los procedimientos de contratación pública.

43. El código prevé que la contratación pública podrá efectuarse ya por subasta abierta o restringida (internacional o de publicación local), ya mediante negociación. La contratación por adjudicación (abierta o restringida), que también se prevé en el código, no se practica en Malí. Sólo

²³ Ley 91-047/AN-RM relativa a la protección del medio ambiente y de las condiciones de vida.

²⁴ Ley 95-031 en la que se fijan las condiciones de gestión de la fauna silvestre y su hábitat.

²⁵ Ley 95-004 que fija las condiciones de gestión de los recursos forestales.

²⁶ Decreto 95-401/P-RM.

se recurre a la contratación negociada si falla el procedimiento de la licitación, si existe una situación de urgencia o si es necesario proteger el interés superior del Estado.²⁷ La licitación puede ir precedida de un concurso o seguida de una preselección. En el caso de las compras efectuadas por la administración pública, la licitación restringida puede utilizarse cuando se trate de valores inferiores a 20 millones de francos CFA para los suministros y 50 millones de francos CFA para los trabajos, o cuando sólo un número limitado de candidatos puede ofrecer los trabajos, suministros o servicios solicitados. En ese caso se requiere la opinión de la Dirección General de Contratación Pública (artículo 29 del Código).

44. Para efectuar las compras por licitación, las instituciones públicas deben establecer el pliego de condiciones y formar una comisión de examen de las ofertas. La Dirección General de Contratación Pública tiene exclusivamente una función de control: autoriza (después de verificar y, en su caso, modificar los pliegos de condiciones) la invitación a licitar y da su opinión sobre la decisión de la comisión de examen de las ofertas, en la que no debe estar representada. Se otorga a las empresas malienses un margen preferencial del 15 por ciento sobre los precios ajustados de los suministros (10 por ciento en el caso de los servicios): cuando se comparan las ofertas se tiene en cuenta ese margen.

45. Los donantes que financian las compras del sector público no están obligados a pagar los derechos e impuestos. Desde 1990 esos derechos e impuestos deben pagarse mediante un cheque sobre el Tesoro (lo que equivale a un simple juego de escrituras contables). En la práctica no se aplica ese procedimiento, que sería un medio de limitar el fraude fiscal y aduanero en las contrataciones públicas. Los derechos e impuestos sobre la adquisición pública de productos petrolíferos financiada por el extranjero son abonados por los donantes, que después obtienen un reembolso.

46. En el cuadro III.4 se indican los montos según los modos de contratación pública, entre 1994 y 1996. La parte de la contratación pública financiada por el presupuesto nacional ha aumentado considerablemente durante ese período (36,9 por ciento del importe total en 1996 contra 16,9 por ciento en 1994). Cuando la financiación procede del presupuesto nacional se utiliza con mucha frecuencia la contratación negociada (aproximadamente el 60 por ciento de las contrataciones públicas financiadas por el presupuesto del Estado), más que en el caso de la contratación pública financiada por el exterior (menos del 4,5 por ciento de las compras totales financiadas por extranjeros).

Cuadro III.4
Montos y modos de contratación pública, 1994-96
(Millones de francos CFA)

	1994		1995		1996 ^a	
	Presupuesto nacional	Financiación exterior	Presupuesto nacional	Financiación exterior	Presupuesto nacional	Financiación exterior
Negociación	5.708	1.539	9.469	1.132
Licitación abierta	3.784	38.752	6.190	1.876
Licitación restringida	72	6.861	109	23.929
Total	9.564	47.152	12.056	40.052	15.768	26.937

... No disponible.

a Hasta el 30 de noviembre de 1996.

Fuente: Cálculos realizados por la Secretaría de la OMC a partir de datos proporcionados por las autoridades de Mali.

²⁷ Decreto 95-401/P-RM, artículo 34.

ix) Prescripciones en materia de contenido nacional

47. Según las autoridades en Malí no hay en vigor ninguna prescripción relativa al contenido nacional.

x) Otras medidas

48. Malí ha prohibido el comercio con Israel. Según las autoridades, no hay en vigor ningún acuerdo oficial de comercio de compensación o destinado a influir en la cantidad o valor de los bienes y servicios exportados hacia Malí. Asimismo, las autoridades no están al corriente de la existencia de ese tipo de acuerdos entre empresas malienses y extranjeras.

49. Malí participa en las sanciones comerciales internacionales decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por las instituciones regionales de las que es miembro. La Secretaría de la OMC no sabe que Malí haya adoptado ninguna medida con fines de balanza de pagos.

3) MEDIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS EXPORTACIONES

i) Marco reglamentario

50. Los trámites de registro que se exigen en materia de importación de mercancías con fines comerciales se aplican también a las exportaciones; esos trámites permiten obtener el título de comerciante. además de los comerciantes, hay productores que también pueden exportar su producción, por ejemplo los ganaderos y artesanos o las respectivas asociaciones. Concretamente, todas las exportaciones de carácter comercial deben efectuarse al amparo de un Certificado de intención de exportar expedida por los servicios de la Dirección Nacional de Asuntos Económicos (sección iii) *infra*).

51. Toda operación de exportación cuyo valor sea superior a 1 millón de francos CFA requiere la constitución de un expediente de domiciliación en un banco autorizado. La totalidad de los ingresos de exportación debe repatriarse y convertirse en francos CFA en el plazo de 180 días (anexo I.1).

ii) Derechos e impuestos de exportación

52. Los únicos gravámenes a la exportación vigentes son la contribución por prestación de servicio del 3 por ciento sobre el valor f.o.b. del oro y el impuesto de 7,5 francos CFA por kg de pescado, impuestos éstos que gravan igualmente las ventas de ambos productos en el mercado interno. Originalmente, la contribución por prestación de servicio, establecida para financiar la Caja autónoma de amortización, se aplicaba a las importaciones y exportaciones de todos los productos. En 1991 (Ley 91-32) se integró en el presupuesto nacional y se suspendió su aplicación a las exportaciones, salvo las exportaciones de oro.²⁸

53. En 1991 se suprimieron los derechos e impuestos a la exportación para la mayor parte de los productos. Después de la devaluación se eliminó el impuesto a la exportación de los productos de ganadería, a fin de no poner en peligro las oportunidades de desarrollo y de acceso a los mercados de esos productos en la subregión. Desde abril de 1997 se han suspendido los derechos e impuestos a la

²⁸ Dicha contribución habrá de aplicarse a todas las materias preciosas y, de momento, al oro.

exportación (impuesto a la exportación, contribución por prestación de servicio, derecho de registro).²⁹

iii) Prohibiciones, licencias y demás medidas de limitación de las exportaciones

54. En virtud del artículo 23 del Decreto 89-194, las autoridades pueden adoptar las disposiciones particulares que consideren necesarias en materia de exportación. Así, se prohíben las exportaciones de bovinos jóvenes machos, de cinco años y menos, y de hembras reproductoras no estériles de la especie bovina, salvo por derogación en el marco de acuerdos especiales entre Malí y terceros países que quieran constituir núcleos de ganadería (capítulo IV.2) f)).³⁰ La prohibición de exportación se aplica igualmente a las materias preciosas (por ejemplo, oro y diamantes) en bruto.

55. Los formularios del Certificado de intención de exportar, que se exigen para todas las exportaciones, se obtienen en la Cámara de Comercio y una vez llenados se depositan en el servicio único de la Dirección Nacional de Asuntos Económicos. Las Intenciones de exportación de oro y de algodón han de abonar derechos de timbre según el baremo que se aplica a las Intenciones de importación (sección 2 vi) *infra*). Las Intenciones de exportación de los demás productos no están sujetas al pago de esos derechos.

56. Lo mismo que las operaciones de importación, las exportaciones de ciertos productos pueden ser objeto de vigilancia o de disposiciones particulares por diversas razones económicas, políticas o sociales.³¹ Las exportaciones de plantas requieren un certificado fitosanitario; las exportaciones de objetos de arte deben ser autorizadas por el Ministro encargado de las artes y la cultura. Asimismo, las exportaciones de carne y de animales vivos requieren la presentación de un certificado sanitario.³² Actualmente se prevé un procedimiento simplificado para las exportaciones de ganado a fin de no alentar las exportaciones no oficiales, es decir, sin título de exportación: se expide un certificado provisional de intención de exportar en el momento de salir del territorio, al tiempo que el agente de la ganadería expide el certificado sanitario. Ese certificado provisional de intención de exportar se transmite luego a la Dirección Nacional de Asuntos Económicos para su registro.

57. Las exportaciones de cueros y pieles están sometidas a una autorización especial de exportación expedida por la Dirección Nacional de Asuntos Económicos.³³ La profesión de exportador de pieles y cueros está sujeta a otras condiciones, incluidas la aceptación de instalaciones y materiales por la OMBEVI y la preparación de fondos homogéneos o "surtidos" a efectos de la exportación (capítulo IV.2) ii) f)).

iv) Subvenciones a la exportación

58. Según las autoridades, Malí no concede subvenciones a la exportación.

²⁹ Decreto N° 97-0551/MFC-SG por el que se deroga el decreto N° 96-0001/MFC-SG de 5 de enero de 1996 que fija el monto de los derechos e impuestos a la exportación de pieles en bruto.

³⁰ Decreto 72-1223/MP-MFC.

³¹ Artículo 23 del Decreto 89-194/P-RM.

³² Orden 90-2442/MFC-CAB.

³³ Decreto 95-416/P-RM de 23 de noviembre de 1995 que reglamenta el comercio de cueros y pieles.

v) Exención de derechos e impuestos y zonas francas

59. Se han tomado ciertas medidas específicas para fomentar el desarrollo de las exportaciones: la introducción del IVA, la supresión de derechos e impuestos a la exportación, incluido el derecho del timbre, y la creación de zonas francas prevista en el Código de Inversiones de febrero de 1991. En efecto, las empresas francas, cuya producción debe exportarse en proporción no inferior al 80 por ciento, gozan de la exención de todos los derechos e impuestos de carácter fiscal, parafiscal y aduanero (capítulo II.4) ii)). En la actualidad hay tres empresas que se acogen a ese régimen: una empresa de producción de frutas y verduras, una unidad de producción de apósitos que exporta esencialmente a la subregión y una empresa de agrios, de tratamiento y acondicionamiento de productos oleaginosos instalada en Sikasso. Esas empresas francas podrían ser una fuente de distorsiones y de competencia desleal: esas empresas abonan derechos e impuestos cuando comercializan en el mercado interno más del 20 por ciento de su producción, pero no es seguro que tengan que pagar impuestos sobre sus consumos intermedios.

60. El Código Minero prevé la exención de derechos, impuestos y gravámenes sobre las exportaciones de productos mineros, así como sobre el volumen de negocios y el producto de las ventas correspondientes (gráfico II.4) iii)) No obstante, se cobra la contribución por prestación de servicio sobre las exportaciones de oro (sección 3) ii) *supra*). En Malí, el régimen de admisión temporal lo utiliza esencialmente el sector de la construcción y las obras públicas respecto de la maquinaria importada para su utilización en las obras y que luego se reexporta. Dos empresas de transformación utilizan ese régimen: una fábrica de tejidos sin blanquear y una fábrica de lejía. El Código Aduanero de Malí, del que se está preparando una nueva versión, no prevé el régimen de devolución de derechos.

vi) Promoción, financiación y ayuda a las exportaciones

61. Antes de 1990 la promoción de las exportaciones corría a cargo del Centro de Comercio Exterior de Malí, creado en 1977. Actualmente se encarga de esa promoción una división de la Dirección Nacional de Asuntos Económicos. Ese cambio institucional (paso de una estructura autónoma (EPIC)³⁴ a una división de una dirección nacional) no ha mejorado la eficacia de la estructura, que funciona hoy con cargo al presupuesto del Estado y dispone de unos recursos que se estiman insuficientes. La mayor parte de las medidas de fomento del comercio se llevan a la práctica en el marco y con la ayuda de la UEMAO (Feria de Ouagadougou, por ejemplo). La institucionalización de ciertas ferias, como la Feria y Exposición de Bamako (FEBAK), y la conclusión de acuerdos bilaterales tienen por objeto apoyar esas medidas. Por otra parte, el Centro Nacional de Promoción de las Inversiones (CNPI), creado en 1996, tiene por objeto ayudar al desarrollo de líneas de producción y así, indirectamente, promover las exportaciones.

vii) Otras disposiciones

62. Malí no aplica ninguna limitación voluntaria de las exportaciones. Además, ninguna ley prohíbe la constitución de cárteles de exportación.

4) OTRAS MEDIDAS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO

i) Comercio de Estado, empresas públicas y privatización

63. La política por la cual el Estado decide traspasar las sociedades de capital público se inició en 1988 con la aplicación del Programa de Ajuste del Sector de las Empresas Públicas (PASEP). La

³⁴ EPIC significa establecimiento público de carácter industrial y comercial.

primera fase del PASEP (1988-92) abarcó 35 empresas públicas, 6 de las cuales debían rehabilitarse, 14 privatizarse y 15 liquidarse. Está en curso un plan de acción para la reforma de las empresas públicas 1996-98. Ese plan prevé la cesión total o parcial por el Estado de sus acciones en siete empresas y la reestructuración de otras siete. A finales de 1997 se habían disuelto o liquidado en total 20 empresas públicas y otras 40 se habían privatizado total o parcialmente; otras empresas fueron simplemente reestructuradas.

64. La ejecución del PASEP ha tropezado con tres obstáculos: la escasa internacionalización del programa de privatización (cuadro III.5), la ausencia de una ley y unos procedimientos claros de privatización y la relación entre desembolso y privatización (cesiones realizadas de manera precipitada para respetar los plazos). La privatización se rige actualmente por la Ley 94-041 que establece los principios fundamentales de la cesión de las empresas del sector público y estipula que la autorización de privatización debe ser otorgada por un decreto del Consejo de Ministros; todavía no se ha aprobado el decreto de aplicación de esa ley. Se prevé una nueva lectura de la ley, que se considera demasiado rígida³⁵, así como la constitución de un comité de privatización. Actualmente la transferencia de las empresas se hace por licitación. Cuando la licitación resulta infructuosa se puede negociar la cesión.

Cuadro III.5
Empresas públicas y privatización

Empresas	Parte del Estado (%)	Parte de intereses extranjeros (%)	Observaciones
a) Empresas privatizadas			
Banque de Developpement du Mali (BDM)	20	17	Privatización parcial (1989)
BETRAM (mantenimiento, ventas)	0	0	Privatización total (1993)
COMATEX (industria textil)	20	80	Privatización parcial (1994)
EDIM (edición, imprenta)	10	0	Privatización parcial (1991)
EMAB (fabricación de muebles)	0	0	Privatización total (1990)
FRUITEMA (venta de frutas y verduras)	10	20	Privatización parcial seguida de liquidación
Grand Hôtel (hostelería)	0	0	Privatización total (1994)
HUICOMA (aceitería)	40	0	Privatización parcial (1990)
ITEMA (textiles)	20	0	Privatización parcial (1990)
LPM (papelería)	0	0	Privatización total (1991)
OTER (desarrollo rural)	0	0	Privatización total (1995)
PETROSTOCK (almacenamiento y distribución de productos petrolíferos)	0	0	Privatización total (1996)
PPM (oficinas)	0	0	Privatización total (1991)
SEMA (inmobiliaria)	20	0	Privatización parcial (1991)
SEPAMA (aceitería)	0	0	Privatización total (1995)
SEPOM (aceitería)	0	0	Privatización total (1988); absorbida por Huicoma.
SMECMA (equipos agrícolas)	0	0	Privatización total (1991)
SNED (estudios)	0	0	Privatización total (1993)
SOCAM (concentrado de tomates)	20	40	Privatización parcial (1989)

³⁵ Esa relectura tiene por objeto: i) hacer más flexible el modo de transferencia de la propiedad de parte del capital de las sociedades de economía mixta en poder del Estado; ii) reducir los plazos de ciertas cesiones de empresas facultando al Gobierno para ceder las partes del Estado en el patrimonio de las sociedades de economía mixta, a reserva de que la participación en el capital de la empresa no sea superior a 750 millones de francos CFA; iii) autorizar el procedimiento negociado en caso de imposibilidad de realizar la cesión en condiciones de libre competencia y de igualdad entre los licitadores; iv) confiar al Ministro de Hacienda la tutela de las empresas que han de privatizarse; v) confirmar por decreto las modalidades de las operaciones de privatización; vi) prever la privatización directa de los establecimientos públicos de carácter industrial y comercial sin recurrir a la liquidación, que trae consecuencias sociales muchas veces nefastas.

Empresas	Parte del Estado (%)	Parte de intereses extranjeros (%)	Observaciones
SOCIMA (materiales de construcción)	0	0	Privatización total (1991)
SOGEMORK (explotación de oro)	20	100	Privatización parcial (1995)
SUKALA.SA (fabricación de azúcar)	40	60	Privatización parcial (1996)
TAMALI (curtiduría)	0	100	Privatización total (1993)
UCEMA (cal y cerámicas)	0	0	Privatización total (1991)
ULB (producción y comercialización de leche)	0	0	Privatización total (1995)
MOTEL Bamako	0	0	Privatización total (1995)
Campement Bandiagara (hostelería)	0	0	Privatización total (1996)
Campement Bougouni (hostelería)	0	0	Privatización total (1996)
Rizeries de l'ex Office du Niger (descascarillado de arroz paddy)	0	0	Privatización total (1996)
Centre des travaux de Niono (infraestructuras hidroagrícolas)	0	0	Privatización total (1996)
Kanaga (Hostelería)	0	0	Privatización total (1997)
b) Empresas en curso de privatización			
Matadero frigorífico de Bamako	100	0	Privatización en 1998
CNAR (seguros)	87	0	Privatización en 1998
EMAMA (mantenimiento)	87	0	Privatización en 1998
Hôtel de l'Amitié (hostelería)	100	0	Ofrecida en concesión por 30 años a contar del 30 de junio de 1998
Hôtel Azalai (hostelería)	...	0	Privatización prevista en 1998
BMCD (banco)	100	0	Privatización prevista en 1998
SONATAM (tabaco y cerillas)	100	0	Monopolio; Privatización parcial prevista
SOMACO-SA (conservería)	20	40	Privatización total prevista
MALITAS (agencia de viaje)	28,3	0	Privatización total prevista
SMPC (productos químicos)	20	0	Privatización total prevista
c) Otras empresas públicas			
BNDA (banco)	39,5	38	
BCS-SA (banco)	49,5	50	
BHM (banco)	15	0	
UMPP (productos farmacéuticos)	100	0	
CMDT (algodón)	60	40	Monopolio
ON (desarrollo agrícola)	100	0	
EDM (producción y distribución de energía eléctrica)	97,2	2,8	Monopolio
SOMILO (explotación de minas de oro)	51	49	
SOMISY SA (explotación de minas de oro)	20	80	
SEMOS SA (explotación de minas de oro)	18	72	
SONAREM (prospección minera)	100	0	
Air Mali (transporte aéreo)	10	0	
ADM (gestión de los aeropuertos)	100	0	Monopolio
COMANAV (transporte fluvial)	100	0	Monopolio
RCFM (transporte ferroviario)	100	0	Monopolio
SONAM (equipo naval)	12,8	0	
ACI-SA (inmobiliaria)	50	0	
OPAM (gestión de las reservas nacionales de seguridad)	100	0	
ORT (turismo y gestión hotelera)	100	0	
ONP (servicio nacional de correos)	100	0	Monopolio
PPM (distribución de productos farmacéuticos)	100	0	
SOTELMA (telecomunicaciones)	100	0	Monopolio
PMU-MALI (organización de apuestas y carreras de caballos)	75	0	
CESPA	100	0	
SLMTP (alquiler de material de obras públicas)	80	0	

Fuente: Autoridades de Malí.

ii) Subvenciones y otras formas de ayuda a la producción

65. El Estado de Malí, a través de los institutos de investigación, las operaciones de desarrollo rural y los proyectos de desarrollo agrícola, asume una misión de investigación, de expansión agraria, de protección de los cultivos vegetales, de mantenimiento de las infraestructuras y de formación. El Instituto de Economía Rural está especializado en las investigaciones agronómicas, zootécnicas, forestales, ambientales e hidrobiológicas. El Programa Nacional de Extensión Agrícola empezó a funcionar en 1992. También desarrollan actividades de extensión agrícola ciertas ONG, la Cámara de Agricultura y algunas organizaciones de productores.

66. La CMDT, en las zonas de que se ocupa, prefinancia en condiciones favorables (por ejemplo sin interés) insumos y materiales agrícolas. El Estado de Malí, a través de la OPAM (Servicio de Productos Agrícolas de Malí) gestiona las reservas de cereales destinadas a garantizar la seguridad alimentaria del país.³⁶ El nivel de esa reserva está fijado actualmente en 35.000 toneladas de cereales. El Código de Inversiones y el Código Minero prevén una ayuda a la producción en forma de ventajas fiscales y/o aduaneras (capítulo II.4 i) y ii)). En el Código de Inversiones se prevén otras ventajas adicionales a los efectos del desarrollo regional (capítulo II.4) i)).

iii) Reglamentación de los precios y política en materia de competencia

67. Desde 1992 la libertad de precios y la competencia existen en toda la extensión del territorio de Malí. Sin embargo, en los sectores económicos y las localidades en que está limitada la competencia basada en los precios, en las situaciones de crisis o en los casos de subidas excesivas de precios de mercado el Consejo de Ministros puede reglamentar los precios por decreto.³⁷

68. Están prohibidos los cárteles que pueden provocar una distorsión de la competencia. También están prohibidos los abusos de posición dominante (incluidas la negativa a vender, las ventas vinculadas y las condiciones de ventas discriminatorias). El vendedor debe expedir una factura e informar a su cliente acerca de los precios y las condiciones de venta. Está prohibida toda publicidad que contenga afirmaciones, indicaciones o presentaciones falsas o que pueden inducir a error.

69. La elaboración de los textos relativos a la política de competencia y la vigilancia de su aplicación incumben a la Dirección Nacional de Asuntos Económicos, transformada por un texto reciente del Gobierno en Dirección Nacional de Comercio y Competencia.

iv) Medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual

70. En Malí los derechos de propiedad intelectual se rigen por el Acuerdo de Bangui de 1979, del que son signatarios además Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Níger, Mauritania, República Centroafricana, Senegal y Togo. El objetivo esencial de ese acuerdo es promover y proteger la propiedad industrial. El acuerdo establece un régimen uniforme de la propiedad intelectual y, en particular, un sistema de depósito único de solicitudes de patentes de invención, de registro de modelos de utilidad, de marcas de productos o de servicios y de otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por el conjunto de países signatarios del acuerdo.

³⁶ El Estado también gestiona la ayuda alimentaria.

³⁷ Decreto 92-021/P-CTSP que establece la libertad de precios y de la competencia.

71. La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) está encargada de la administración del acuerdo. La estructura nacional de enlace de Malí con la OAPI funciona desde el 30 de septiembre de 1984, fecha de adhesión de Malí al acuerdo. Ese servicio, que depende de la Dirección Nacional de Industria, tiene por misión centralizar y transmitir a la OAPI las declaraciones de innovación realizadas en el territorio de Malí; también está encargado de informar y sensibilizar a la opinión pública. La estructura nacional de enlace recibe una dotación anual de la OAPI, que expide los títulos de propiedad industrial. Las solicitudes relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual no son muy numerosas en Malí. Los títulos de protección de patentes depositadas entre el 24 de noviembre de 1958 y el 30 de septiembre de 1984 fueron expedidos por orden del Ministro de Industria y publicados en el Journal officiel. Hasta la fecha Malí ha registrado en la OAPI 35 solicitudes de patentes de invención, dos solicitudes de modelos de utilidad y cinco solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales. Según informaciones de la SNL, los depósitos de marcas en poder del Secretario del Tribunal de comercio son 21.

72. En la OAPI se está trabajando para poner las disposiciones en vigor en conformidad con las obligaciones de los países miembros en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Ronda Uruguay (ADPIC) (recuadro III.1). Malí se ha adherido al Convenio de Estocolmo de 1967 por el que se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); aún no ha ratificado el acuerdo sobre los derechos conexos firmado bajo la égida de la OMPI. También ha firmado otros acuerdos internacionales en la materia, en particular el Convenio de París, el Convenio de Berna y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Tiene intención de adherirse a los acuerdos de Niza, Lisboa, Estrasburgo y Locarno.

73. Los derechos de autor están protegidos por la Ley 84-26/AN-RM, de 17 de octubre de 1984, que actualmente se está revisando para ponerla en conformidad con las disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Según las autoridades la ley revisada se aprobará antes de finales de 1998 y protegerá, en particular, los derechos de autor y derechos conexos relacionados con los programas informáticos y las bases de datos. La Oficina de Derechos de Autor de Malí (BMDA), establecimiento público de carácter profesional, tiene por objeto defender los intereses materiales y morales de los creadores, sensibilizar e informar sobre esta cuestión a la población, incluida la administración. La BMDA lamenta la falta de interés por los derechos de autor manifestada por las autoridades de Malí, en particular las fuerzas del orden público, la justicia y la administración de aduanas.

74. En Malí las falsificaciones afectan principalmente los medicamentos, las casetes audio, los artículos de deportes y las grandes marcas. La BMDA estima que el 30 por ciento de las casetes audio que se vendieron en Malí en 1997 eran casetes piratas (contra un 80 por ciento en 1990). El encarecimiento de las importaciones como consecuencia de la devaluación del franco CFA ha provocado un aumento del consumo de medicamentos falsificados. Conscientes de la situación, las autoridades han renunciado a percibir los derechos e impuestos aplicables a la importación de medicamentos esenciales. Los actos de piratería y de falsificación pocas veces dan lugar a condenas, que además son puramente simbólicas.

Recuadro III.2: El Acuerdo de Bangui sobre la propiedad intelectual

Legislación en materia de patentes: Las patentes pueden referirse a cualquier invención nueva que suponga una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial; no pueden patentarse las obtenciones vegetales, las especies animales y los procedimientos biológicos de obtención de vegetales o animales con excepción de los procedimientos microbiológicos. La protección de las obtenciones vegetales está estipulada por el Acuerdo sobre los ADPIC (apartado b) del párrafo 3 del artículo 27).

Las topografías de los circuitos integrados actualmente no son objeto de protección. Las patentes se protegen durante un plazo de 10 años que puede prorrogarse dos veces por períodos de cinco años. La prórroga no es automática, y esta duración deberá ponerse en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecen para la protección de las patentes un plazo de 20 años contados desde la fecha de la solicitud. También existen divergencias en lo que respecta al otorgamiento de licencias obligatorias, que pueden concederse si la explotación de la invención patentada es impedida por la importación del producto protegido. Conforme al párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos deben poder gozarse sin discriminación basada en el origen del producto. Del mismo modo, el párrafo 2 del artículo 58 del anexo I del Acuerdo de Bangui, relativo a las falsificaciones cuando no existe explotación local, no es compatible con las prescripciones del párrafo 1 del artículo 27. Las disposiciones que reglamentan el otorgamiento de licencias obligatorias por motivos de interés público también deberán ponerse en conformidad con las disposiciones del artículo 31 del Acuerdo. Por otra parte, este último establece que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto idéntico es diferente del procedimiento patentado (artículo 34). No produciéndose tal prueba, existe presunción de falsificación del procedimiento. Esta norma no figura en el Acuerdo de Bangui.

Legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio: Las marcas de productos o de servicios se protegen durante un plazo de 10 años contados desde la fecha de la solicitud de registro, plazo renovable indefinidamente. El Acuerdo sobre los ADPIC (párrafo 1 del artículo 16) establece una protección para los signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En caso de que los signos sean idénticos se presume que existe probabilidad de confusión. El Acuerdo dispone igualmente una protección mayor para las marcas notoriamente conocidas (párrafo 2 del artículo 16), así como una protección contra el uso de signos idénticos o similares para productos no similares. Estas protecciones no están dispuestas expresamente por el Acuerdo de Bangui. Conforme al párrafo 1 del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC, el registro de las marcas sólo puede anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso. Ese período es de cinco años en virtud del Acuerdo de Bangui (artículo 22).

Derecho de auto: Toda obra original del espíritu, o de naturaleza artística o científica, así como su título, goza de un derecho de propiedad incorporeal, exclusivo y oponible a todos los terceros. La protección se refiere en particular a los libros y demás escritos, conferencias, alocuciones y demás obras de igual naturaleza creadas para la representación escénica, las obras musicales, las obras pictóricas, las obras de arquitectura, los mapas y producciones gráficas, las obras cinematográficas, radiofónicas y audiovisuales, las obras fotográficas y las traducciones y arreglos de las obras antes mencionadas, y el folclore.

El Acuerdo sobre los ADPIC confiere igualmente una protección a los programas de ordenador y a las compilaciones de datos que, por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual (artículo 10). El Acuerdo de Bangui no contiene ninguna disposición correspondiente. Los derechos conexos estipulados en el artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC, como la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, tampoco figuran en el Acuerdo de Bangui.

Dibujos y modelos industriales y otras formas de propiedad intelectual: Todo creador de un dibujo o modelo industrial tiene el derecho exclusivo de explotación y de venta conforme al Acuerdo de Bangui. La duración de la protección otorgada por el certificado de registro de un dibujo o modelo industrial expira cinco años después de la presentación de la solicitud de registro, pero puede renovarse dos veces. El Acuerdo sobre los ADPIC (párrafo 1 del artículo 26) confiere derechos más amplios, en particular respecto de la importación. El Acuerdo de Bangui prevé el registro de los nombres comerciales durante un plazo renovable de 10 años, contados desde la fecha de presentación. Sólo los nombres registrados pueden dar lugar a sanciones penales. Las denominaciones de origen obtienen protección si han sido registradas por la OAPI o en caso de que un acuerdo internacional en que Mali sea parte determine un efecto de registro.

Fuente: OMC (1997).